



SG/nv

**D. JOAQUIM MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA.**

C E R T I F I C O : Que la Sala de Gobierno del mismo, en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

TREINTA Y CINCO.- Fuera del orden del día, por el Excmo. Sr. Presidente se da cuenta a la Comisión de Sala de Gobierno de la siguiente propuesta de resolución, para los Expedientes T.S. núm. 245/2015-P- Pieza COVID19 y T.S. núm. 154/2020-P:

"Se da cuenta a la Comisión de la publicación en el DOGC núm. 8259, de 30 de octubre de 2020, de la *RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña*, en cuya resolución núm. 16 se contiene una regulación de las "*actuaciones policiales*", incluyendo en su epígrafe 2 disposiciones específicas sobre la asistencia letrada a los detenidos en dependencias policiales, con indicación de "*cómo se tiene que hacer*" la asistencia letrada; y en el epígrafe 3, sobre la puesta a disposición judicial de los detenidos por parte de los agentes que la han practicado, resuelve la autoridad sanitaria que "*En la medida en que la presencialidad no esté expresamente justificada por la autoridad judicial, se tiene que minimizar el desplazamiento y la movilidad de detenidos de comisarías en dependencias judiciales, con el uso intensivo de las herramientas telemáticas, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de justicia*".

La autoridad sanitaria que emite la resolución descrita lo hace, según se extrae de la propia exposición de motivos, con la cobertura de la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, y también del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. El art 55 k) de la Ley de salud pública habilita a las autoridades sanitarias, en situaciones de





pandemia declaradas, para adoptar medidas de limitación de la actividad, del desplazamiento de las personas y de la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales; e igualmente, en el Real Decreto 926/2020 se residencia en quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma la consideración de "autoridad competente delegada"; no obstante ello, según el art. 2.3, la habilitación alcanza al dictado, por delegación del Gobierno de la Nación, de "las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11" del propio Real Decreto, entre los que ninguna disposición afecta al estatuto del detenido, ya lo sea en dependencias policiales o en sede judicial.

No estará demás recordar que el derecho a la libertad personal encuentra regulación constitucional dentro del Capítulo II del Título I, sobre "Derechos y libertades" y que por tanto su desarrollo y regulación constituyen materia reservada a ley orgánica (art. 81.1 CE). También que el art. 17.1 de la Constitución garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, **en los términos que la ley establezca** (art. 17.1 CE).

Sobre la celebración de actos procesales recurriendo de forma preferente a los entornos telemáticos se ha producido la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en cuyo art. 14 se dispone que, hasta el 20 de junio de 2021 "(...) *los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello*". Y en el apartado 2 de este mismo artículo, se particulariza una regulación para el orden jurisdiccional penal, en el que se impone la presencia física del acusado en los juicios por delito grave. Además, por lo que hace a las comparecencias de detenidos o presos ante la autoridad judicial se indica que "*También se requerirá la presencia física del investigado o acusado, a petición propia o de su defensa letrada, en la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando cualquiera de las acusaciones interese su prisión provisional o en los juicios cuando alguna de las acusaciones solicite pena de prisión superior a los dos años, salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor que lo impidan. Cuando se disponga la presencia física del acusado o del investigado,*





será también necesaria la presencia física de su defensa letrada, a petición de ésta o del propio acusado o investigado”.

Por su parte, en sintonía con la disposición legal reproducida, la Guía de buenas prácticas del Consejo General del Poder Judicial actualizada por acuerdo de su Comisión Permanente de 8 de octubre de 2020, en materia de medidas preventivas de carácter organizativo (VIII) incluye en su epígrafe 3.1 la siguiente indicación *“En general todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello, salvo en el orden jurisdiccional penal donde en los juicios por delito grave será necesaria la presencia física del acusado y defensa letrada y la audiencia prevista en el artículo 505 de la LECrim. (remisión al art. 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre)”.*

Esta Comisión de la Sala de Gobierno no puede por menos que compartir íntegramente las razones ofrecidas en la resolución la autoridad sanitaria respecto a la máxima necesidad y urgencia en la adopción de medidas sanitarias y sociales estrictas encaminadas a la lograr la contención de los contagios por el COVID-19 en Cataluña; razones todas que, sin embargo, en ningún caso pueden implicar merma de los derechos constitucionales de las personas detenidas, ni en su tratamiento policial ni en el judicial, ni tampoco limitar las competencias del Juez de instrucción para garantizar estos mismos derechos. En este orden, constatamos que las pautas de actuación marcadas en la resolución de la autoridad sanitaria no aseguran la protección de datos personales de quienes aparezcan referenciados en el atestado policial (remisión por correo electrónico a dirección corporativa de Letrado/a), ni introduce mecanismos que garanticen en todo caso la confidencialidad de la entrevista reservada a que alude el art. 520.6 d/ y 7 de la LECrim.

Atendido todo lo expuesto, la Comisión de la Sala de Gobierno no puede por menos de recordar el sentido del acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento de la crisis ocasionada por el COVID-19, en su Reunión núm. 9 de 1 de abril de 2020 (6.1.) sobre la conveniencia de recurrir a la videoconferencia u otros canales de comunicación análogos para llevar a cabo las comparecencias policiales o judiciales de detenidos, como formato de





desarrollo más idóneo para la evitación de los riesgos de contagio inherentes a todos actos presencial en que intervengan más de dos personas. Pero también que:

1. *Se trata de actuaciones que pueden comprometer derechos básicos de todo detenido. Los derechos que definen el estatuto del detenido tienen una intensa regulación procesal (arts. 520 a 527 LECrim.) y relieve constitucional evidente (art. 17 CE y 6.1.3c CEDH), de modo que cualquier limitación o menoscabo compromete la validez de la actuación -ex art. 238.3 LOPJ- (SSTEDH de 9/11/2018 -Beuze c. Bélgica- y de 13-11-2018 -Simsek c. Turquía- reconocen violación del art. 6.1.3 c) por defectos de asistencia letrada; y STC 21/2018, de 5 de marzo, otorga amparo por limitaciones en la asistencia letrada).*

2. *El garante último de la efectividad de todos los derechos del detenido es el juez ante el que es conducido. Por tanto sobre dicho juez pesa la carga de velar por la regularidad del acto procesal que dirige, incluidas las formalidades con que se haya podido materializar el derecho a la asistencia letrada.*

Póngase este acuerdo y también la Resolución administrativa que lo justifica en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a los efectos de su control de legalidad, así como también del Departament de Justícia y de Interior de la Generalitat de Catalunya, en este caso para su participación a los responsables policiales. Y dada la difusión general de la resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, participéase igualmente este acuerdo a los jueces y magistrados/as del ámbito de este Tribunal Superior, al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya y a la Fiscalía Superior de Cataluña”.

Sometido este acuerdo a la Comisión de la Sala de Gobierno, el mismo es aprobado por UNANIMIDAD.

Y PARA QUE CONSTE y en cumplimiento de lo acordado, libro y firmo el presente en Barcelona, a cinco de noviembre de dos mil veinte.

